

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 19/002/2006 (público)

Servicio de Noticias: 089/2006

5 de abril de 2006

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR190022006>

República Centroafricana: El gobierno debe actuar contra los soldados que mataron, hirieron y desplazaron a civiles desarmados en el noroeste del país

Amnistía Internacional expresa honda preocupación por el hecho de que el gobierno de la República Centroafricana siga sin tomar medidas contra los miembros de sus fuerzas de seguridad que, según los informes, mataron e hirieron a decenas de civiles desarmados y desplazaron a decenas de miles más en las provincias de Ouham-Pende y Ouham.

"El gobierno centroafricano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de los abusos contra los derechos humanos que cometen miembros de las fuerzas de seguridad y de los grupos armados. Esta protección debe incluir investigar los abusos, identificar a los presuntos autores, hacerlos comparecer ante la justicia y proporcionar una reparación completa a las víctimas", ha declarado hoy (5 de abril) Amnistía Internacional.

Según los informes que ha recibido la organización, los miembros de las fuerzas de seguridad de las provincias de Ouham-Pende y Ouham ejecutaron ilegítimamente a decenas de civiles desarmados e hirieron a otros muchos cuando los rebeldes atacaron a las fuerzas gubernamentales a finales de enero y en febrero de 2006. Decenas de miles de civiles que huían de los ataques se han convertido en desplazados internos o han huido al vecino Chad, y su acceso a la ayuda humanitaria es precario o inexistente.

Amnistía Internacional tiene noticias de que, después de un ataque cometido el 29 de enero de 2006 por los rebeldes contra Paoua, las fuerzas gubernamentales, concretamente miembros de la Guardia Presidencial, atacaron a civiles desarmados, incluidos niños. Los informes indican que entre las víctimas mortales había niños de apenas 10 años, así como que un gran número de las personas que murieron en Paoua o en sus alrededores eran alumnos del liceo de Paoua.

Según los informes, las fuerzas gubernamentales regulares mataron al menos a 35 personas, entre ellas a Florent Djembert, Vincent Bozoukon y William Béré. Los informes señalan también que en los barracones de la gendarmería local fueron enterrados cuatro cadáveres de personas no identificadas.

Una unidad de la Guardia Republicana, cuerpo de élite del ejército, llegó a Paoua el 31 de enero y, según los informes, mató indiscriminadamente a numerosos hombres, muchos de ellos estudiantes. Algunos estudiantes murieron dentro del liceo. Los informes indican que los miembros de la Guardia Republicana ejecutaron sumariamente a tres varones jóvenes por no mostrar a los soldados el paradero de rebeldes y alijos de armas. Unos periodistas que visitaron Paoua en marzo de 2006 informaron de que al menos 17 alumnos del liceo de la localidad fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de la Guardia Republicana en Paoua y sus alrededores. Trece hombres, entre ellos el policía local Luc Miabé, murieron en

Bémal, cerca de la frontera con Chad.

Según los informes, a principios de febrero, funcionarios locales de seguridad y del gobierno convencieron a los desplazados para que regresaran a sus casas. Sin embargo, estas personas tuvieron que huir de nuevo cuando fueron atacadas por la Guardia Republicana los días 11 y 18 de febrero. Los informes señalan que sólo un estudiante sobrevivió a un incidente en el que los soldados detuvieron a ocho estudiantes y los llevaron a un campamento militar. Los otros siete murieron debido a las palizas recibidas. Al parecer, el sobreviviente se salvó porque las autoridades eclesiásticas locales intercedieron en su favor, aunque también había sufrido heridas en el cuerpo como consecuencia de las palizas. Entre las personas que perdieron la vida en febrero figuran Alfred Gala y un jefe del pueblo de Bonté.

Los homicidios cometidos en las provincias de Ouham-Pende y Ouham de la República Centroafricana han obligado a al menos 7.000 personas a huir al sur de Chad desde finales de enero. Esta cifra se suma a los 43.000 centroafricanos que habían huido del país durante el conflicto armado que finalizó con el derrocamiento del ex presidente Ange-Félix Patassé, en marzo de 2003.

"Nos preocupan enormemente el bienestar y la seguridad de estos refugiados en el sur del Chad. Chad es un país políticamente inestable debido a la rebelión y su gobierno carece de capacidad para proteger a los refugiados y para proporcionarles alimentos, medicinas y albergue. Las organizaciones humanitarias ya están desbordadas con la presencia de alrededor de 200.000 refugiados sudaneses", ha declarado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional pide al gobierno de la República Centroafricana que haga todo lo posible para garantizar la plena protección a sus ciudadanos. Las personas que han huido al Chad y las desplazadas internas, así como aquellas cuyos familiares han sido asesinados, sólo confiarán en que el gobierno puede protegerlas y tiene la voluntad de hacerlo si los autores de las recientes atrocidades comparecen ante la justicia. El gobierno debe adoptar medidas inmediatas de protección, lo que incluye la retirada y sustitución de las unidades de las fuerzas de seguridad presuntamente implicadas en las atrocidades y la suspensión de funciones de sus comandantes.

El gobierno debe dejar claro a sus fuerzas que no tolerará las violaciones de derechos humanos y que los autores responderán de sus actos ante la justicia. Para subrayar esta postura, el gobierno debe crear con carácter urgente una comisión de investigación independiente para identificar a los autores y a las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos en enero y febrero de 2006, con el compromiso de poner en práctica las recomendaciones de la comisión. La comisión debe incluir a nacionales de la República Centroafricana y a expertos extranjeros reconocidos por su competencia, independencia e imparcialidad.